

# **Judicialización electoral: la senda legal de las mujeres para incrementar su presencia en congresos nacionales de América Latina\***

## **Electoral judicialization: the legal path for women to increase their presence in national congresses in Latin America**

OMAR DE LA CRUZ CARRILLO<sup>1</sup>

### INTRODUCCIÓN

Los procesos electorales en América Latina son uno de los temas que más se ha judicializado: se han edificado tribunales especializados en la materia, con el propósito de vigilar la celebración de elecciones democráticas durante el proceso de transición a la democracia. Además, el fortalecimiento de las cortes y la expansión jurídica de los derechos humanos generaron las condiciones propicias para que la ciudadanía comenzara a solicitar la intervención de los jueces, con el propósito de hacer valer sus derechos políticos en asuntos como el derecho a votar y ser votado.

La defensa legal del derecho político a ser votado es la conexión entre la judicialización y el acceso de las mujeres a congresos nacionales. Considerando que la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres también tomó fuerza en las últimas décadas del siglo XX, especialmente a partir de la Conferencia Mundial de la Mujer, impulsada por la ONU, que se llevó a cabo en cuatro ocasiones: Ciudad de México, México, en 1975; Copenhague, Dinamarca, en 1980; Nairobi, Kenia, en 1985; y Beijing, China, en 1995 (Philipp, 2010: 145).

Con el propósito de entender el rol de los tribunales electorales y la judicialización en el acceso de las mujeres a los congresos nacionales en América Latina, la presente ponencia

---

\* La presente ponencia es un extracto de la tesis doctoral del autor titulada “Judicialización electoral en América Latina: el desempeño de las cortes en la promoción de los derechos políticos de la mujer, 1993-2018”.

<sup>1</sup> Candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la FCPyS de la UNAM. Correo electrónico: dlcruzco@gmail.com

tiene por objeto analizar 73 sentencias emitidas por los tribunales electorales y las cortes constitucionales en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, República Dominicana y Venezuela.

En esta ponencia se estudian las sentencias que se han elaborado en cuanto al acceso de las mujeres a los congresos nacionales en América Latina. En la primera parte, se describen los elementos con los que se llevó a cabo el análisis. Y, en un segundo momento, se lleva a cabo un análisis cuantitativo, estadística descriptiva, del trabajo que han desempeñado las cortes en el fortalecimiento respecto a las leyes de cuota de género y su apoyo u obstrucción del acceso de las mujeres al Poder Legislativo en nueve países latinoamericanos.

Con el propósito de entender el papel de los tribunales electorales y la judicialización en el acceso de las mujeres a los congresos nacionales en América Latina, se analizaron las sentencias emitidas por los tribunales electorales y algunas cortes constitucionales en los nueve países (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, República Dominicana y Venezuela) estudiados en la presente investigación debido a que en ellos se logró acceder a información judicial.

La selección de las sentencias se hizo a partir de la aparición de la ley de cuota de género en cada uno de los países; en total se encontraron 4,378 decisiones judiciales sobre la acción afirmativa, pero de ellas sólo 73 son referentes a las elecciones legislativas. Considerando que la presente investigación se enfoca en el acceso de las mujeres a los congresos nacionales, en el caso de los países bicamerales, sólo se abarca la Cámara de Diputados o Asamblea de Representantes<sup>2</sup>.

En total, la base de datos se integra por 73 sentencias que fueron analizadas respecto a la cuota de género en el Congreso Nacional de nueve países de América Latina. De cada una de las decisiones judiciales se identificó, con base en los objetivos de la investigación, la corte que emite la resolución (tribunal electoral o constitucional); si se favorece a la ley de cuota de género, y por ende el acceso de las mujeres al Legislativo; qué actor es el que

---

<sup>2</sup> Para el caso de México se seleccionaron las sentencias de mayor relevancia con base en González Oropeza, Gilas y Báez (2016) y Freidenberg y Gilas (2020) en elecciones nacionales del legislativo, debido al alto número de impugnaciones que se presentan en este país.

impugna, qué es lo que se cuestiona, en qué momento se realiza la queja (dentro o fuera del proceso electoral).

De la información recolectada, se lleva a cabo un análisis cuantitativo en el que se describen por medio de estadística descriptiva las características generales de la base de datos respecto a las cuotas de género en elecciones legislativas nacionales en los nueve países mencionados.

#### ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LAS SENTENCIAS EN MATERIA DE CUOTA DE GÉNERO EN AMÉRICA LATINA

La descripción de los datos se llevará a cabo con base en la clasificación de la información: cuál es la corte que decide, el sentido de la sentencia respecto de la cuota de género, los actores que impugnan, el asunto que se impugna y el momento en el que se lleva a cabo la resolución. Además, esta información se compara con los modelos de tribunales electorales que tienen los distintos países estudiados retomando los modelos de justicia electoral propuestos por Orozco Henríquez (2019).

En cuanto al tipo de corte que resuelve, el 89.04% (65) de las sentencias analizadas son emitidas por una corte electoral y sólo el 10.96% (ocho) por una corte constitucional. Las cortes electorales cuentan con mayor participación porque son las instancias encargadas de impartir justicia electoral en el tema y solamente en algunos casos debe intervenir una corte constitucional, como sucede con la determinación constitucional de la ley cuota de género o cuando la normatividad permite la apelación de las sentencias emitidas por la corte electoral ante la Corte constitucional, como sucedió en 2002 en Ecuador (véase la Tabla 6).

En cuanto al modelo de los tribunales electorales que existen en América Latina (i. Tribunal ordinario del Poder Judicial –Argentina, Brasil y Venezuela–, ii. Tribunal o Consejo constitucional –República Dominicana–, iii. Tribunal administrativo –Colombia–, iv. Tribunal electoral especializado sin atribuciones administrativas –Ecuador, México y Perú–, v. Órgano administrativo electoral con atribuciones jurisdiccionales –Costa Rica–), en los datos recolectados la mayoría de las sentencias se concentran en un Tribunal

ordinario del Poder Judicial y un Tribunal especializado sin atribución administrativa (véase la Tabla 1).

*Tabla 1. Modelo de la corte que resolvió las impugnaciones sobre la ley de cuota de género en elecciones legislativas en nueve países de América Latina, 1993-2018*

<b>Modelo de la corte</b>	<b>Tribunal electoral</b>	<b>%</b>	<b>Tribunal constitucional</b>	<b>%</b>
Tribunal ordinario del P. Judicial	34	46.58%	2	2.74%
Tribunal administrativo	1	1.37%	2	2.74%
Órgano de administración electoral con labor jurisdiccional	6	8.22%	1	1.37%
Tribunal especializado sin atribución administrativa	24	32.88%	2	2.74%
Tribunal o Consejo constitucional	0		1	1.37%
<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>89.04%</b>	<b>8</b>	<b>10.96%</b>

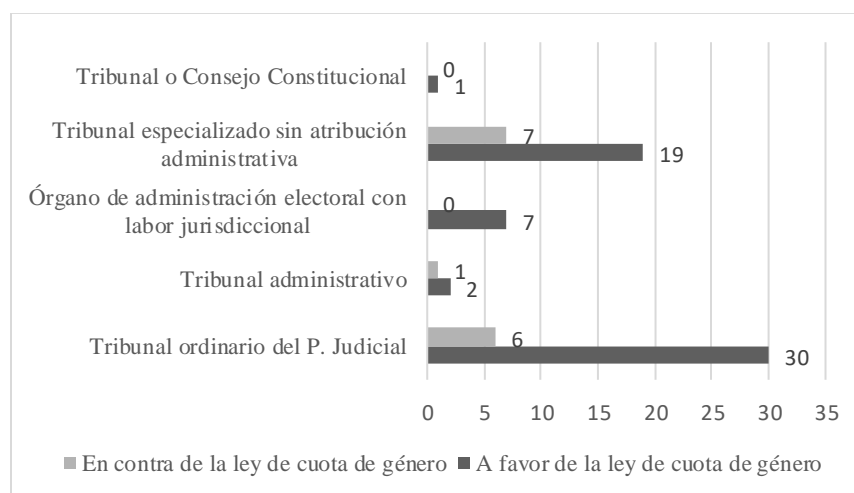
*Elaboración propia con información de la Tabla 2 del Anexo*

El número de sentencias por el modelo de la corte se explica por la información recolectada en la base de datos, debido a que, de los nueve países que integran la base de datos, tres cuentan con un Tribunal ordinario del Poder Judicial (Argentina, Brasil y Venezuela), tres con un Tribunal especializado sin atribución administrativa (Ecuador, México y Perú), uno con un Tribunal administrativo (Colombia), uno con un Órgano de administración electoral con labor jurisdiccional (Costa Rica), y uno con un Tribunal o Consejo constitucional (República Dominicana). Además, en los dos primeros modelos se encuentran los países con más sentencias emitidas en los últimos diez años (Brasil y México).

En cuanto al sentido en que se resuelven las impugnaciones recolectadas, el 80.82% de las veces se falla a favor de los derechos políticos de las mujeres al hacer vigente la ley de

cuota de género, mientras que el 19.18% tienen un sentido adverso, es decir que los tribunales no consideran que se violentan los derechos de las ciudadanas. En ambos casos, estas sentencias se concentran en los modelos de Tribunal ordinario del Poder Judicial y de Tribunal especializado sin atribución administrativa debido a que cuentan con el mayor número de sentencias recolectadas (véase la Gráfica 1).

*Gráfica 1. Sentido en el que se resolvieron las impugnaciones sobre la ley de cuota de género en elecciones legislativas en nueve países de América Latina, 1993-2018*

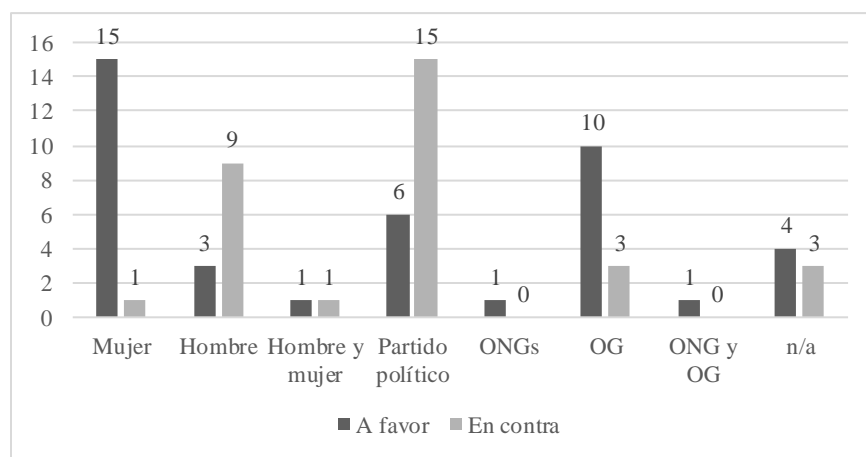


*Elaboración propia*

Algunas razones por las que hay un mayor número de sentencias a favor de los derechos políticos de las mujeres en la base de datos elaborada para la investigación pueden ser el proceso electoral en el que se enfoca el estudio, la incertidumbre de cómo aplicar las cuotas y el rechazo de los hombres de apegarse a las cuotas de género. Es decir que durante las elecciones legislativas hay más actores que llevan a cabo impugnaciones para impulsar o detener una candidatura femenina al estar en juego un gran número de cargos de representación popular por diversos partidos políticos. Los actores recurren a las cortes ante el desconocimiento o el surgimiento de diversas interpretaciones de cómo aplicar la ley de cuota de género. Y porque los hombres son los principales actores que se oponen a la acción afirmativa, por lo que recurren a los tribunales para cuestionarla.

En cuanto a los actores, cinco son los principales jugadores que han realizado las impugnaciones: I. mujeres, con el 21.92%; II. hombres, con el 16.44%; III. partidos políticos, con el 28.77%; IV. Organismos No Gubernamentales (ONG), que en su mayoría son organizaciones que promueven los derechos de las mujeres, con el 1.37%, y V. Organismos Gubernamentales (OG), como los institutos de la mujer, defensoría del pueblo y organismos públicos como la Cámara de Diputados, con el 17.81%. (véase la Gráfica 2).

*Gráfica 2 Principales actores que impugnan asuntos relativos a la ley de cuota de género en elecciones legislativas en nueve países de América Latina, 1993-2018*



*Elaboración propia*

*\*n/a significa no aplica y es utilizado en los casos en los que no se logró obtener la información respecto al demandante.*

La explicación a que mujeres, hombres y partidos políticos sean los principales actores que recurren a los tribunales se debe al acceso a la justicia, puesto que en la mayoría de las legislaciones solamente pueden impugnar los actores que se ven afectados directamente por una acción, en este caso la integración de las listas de candidatos en la cual los tres actores mencionados están involucrados directamente. Son ejemplos de lo anterior Argentina, Costa Rica, Brasil y México.

En cambio, los casos en donde demandan los órganos no gubernamentales y gubernamentales, que son los menos, se dan en países donde más actores pueden iniciar una

demanda si consideran que se violenta una norma o los derechos de las y los ciudadanos. Los casos de Ecuador y Perú son dos ejemplos.

Por último, de los datos de la Gráfica 2 resalta que el sexo masculino (al sumar las demandas iniciadas por hombres y partidos políticos, considerando que los dirigentes de las organizaciones políticas son principalmente varones) es el actor que más recurre a los tribunales en sentido opuesto a la ley de cuota de género con 33 ocasiones y, en sentido contrario, que las mujeres son las que más recurren para hacer valer la cuota de género. Estos datos no sorprenden porque se ha documentado que los partidos políticos y los varones son los principales actores que se oponen o resisten a las leyes de cuota de género (Archenti y Tula, 2007: 189; Ríos Tobar, 2008: 14; Krook, 2008: 31). Incluso, cuando impulsan su aprobación en el Legislativo, son ellos mismos quienes cuestionan la constitucionalidad de la acción afirmativa, tal y como lo describe en el caso francés Scott (2012: 80).

En cuanto al actor que impugna con respecto al modelo del tribunal, destaca que las demandas iniciadas por los partidos políticos se concentran en el arquetipo de Tribunal ordinario del Poder Judicial, mientras que los cuestionamientos que emprenden mujeres y hombres se concentran en el Tribunal ordinario del Poder Judicial y el Tribunal especializado sin atribución administrativa. Por último, es relevante que, en el modelo de Tribunal administrativo, el Órgano de administración electoral con labor jurisdiccional y el Tribunal o Consejo constitucional cuentan con muy pocos o ningún caso con respecto a los hombres y las mujeres como actores demandantes; una posible explicación es que las sentencias obtenidas del tribunal electoral de Costa Rica son emitidas después de los procesos electorales (véase la Tabla 2).

*Tabla 2. Resolución de demandas respecto a cuotas de género iniciadas por los actores con base en el modelo de tribunal en elecciones legislativas en nueve países de América Latina, 1993-2018*

Quién impugna	Tribunal ordinario del P. Judicial	Tribunal administrativo	Órgano de administración electoral con labor	Tribunal especializado sin atribución	Tribunal o Consejo constitucional
---------------	------------------------------------	-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------------------

					jurisdiccional		administrativa			
	A favor	En contra	A favor	En contra	A favor	En contra	A favor	En contra	A favor	En contra
Mujer	7	1					6	2		
Hombre	4	1		1			5		1	
Hombre y mujer					1			1		
Partido político	11	2	1		3		4			
ONGs							1			
OG	6		1		2		1	3		
ONG y OG								1		
n/a	2	2			1		2			

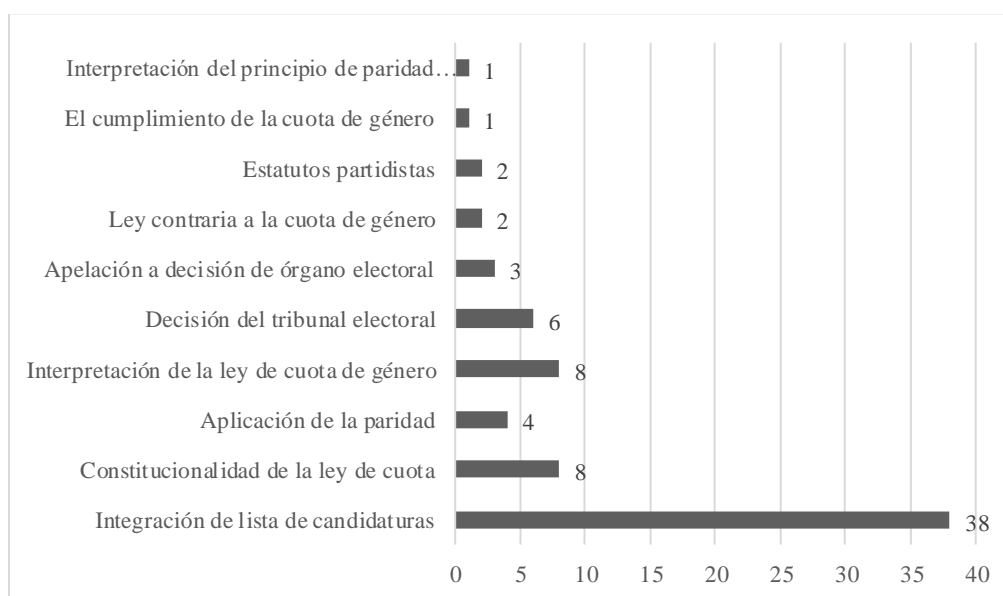
*Elaboración propia*



En los números de la Tabla 2 destaca que el caso costarricense no cuente con ningún fallo adverso, lo cual puede explicarse por el carácter progresista del Tribunal Supremo de Elecciones en el tema desde la aparición de la cuota de género en el país centroamericano.

De las 73 sentencias, la integración de las listas de candidaturas es el asunto más impugnado con el 52% de las ocasiones. En segundo lugar, se encuentran la constitucionalidad de la ley de cuota de género y la interpretación de la de la ley con el 12.5%, de los cuales destaca que la constitucionalidad es un asunto que impugnan hombres solamente, con base en los datos recabados. Los asuntos menos comunes se refieren a la interpretación de la aplicación de la cuota y del principio de paridad horizontal, ambos con el 1.37% (véase la Gráfica 3).

*Gráfica 3. Principales temas de las impugnaciones en materia de las leyes de cuota de género en elecciones legislativas en nueve países de América Latina, 1993-2018*



*Elaboración propia*

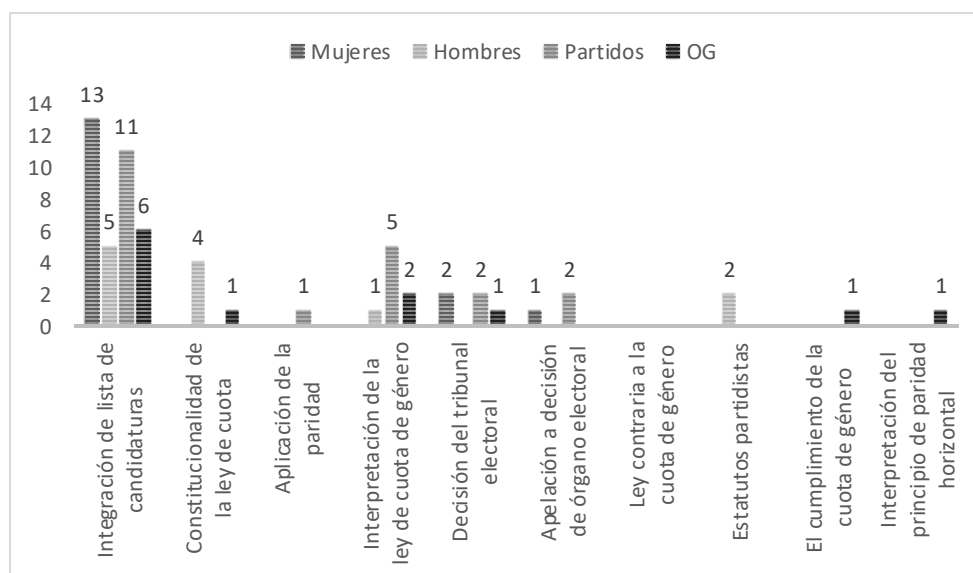
La razón por la que la integración de las listas de candidaturas sea el tema más impugnado se encuentra en las sentencias recolectadas, debido a que la investigación se enfoca en elecciones legislativas y en este proceso son comunes las demandas al interior de los

partidos al momento de elegir a los aspirantes, es ahí donde mujeres, hombres y dirigentes cuestionan la legalidad del proceso de selección buscando defender cada quien sus intereses, y las instancias judiciales son el lugar indicado para la resolver estas pugnas.

En cambio, resulta interesante que la constitucionalidad de las cuotas de género sea una de las más cuestionadas y refleja nuevamente la resistencia que partidos y legisladores han mostrado a la aplicación de estas acciones afirmativas. Por último, es pertinente destacar que la interpretación del principio de paridad es un tema poco analizado, porque el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica ha sido hasta el momento el único tribunal al que se le ha solicitado su interpretación de la paridad con miras a una reforma electoral en el año 2009.

De los temas que impugnan los actores con mayor participación encontramos que las mujeres principalmente objetan la integración de las listas de candidatos y, en un segundo plano, las decisiones de los tribunales. En cambio, los hombres cuestionan, además de las listas de candidaturas, la constitucionalidad de la ley de cuotas, la interpretación de la ley y los estatutos partidarios. Los partidos políticos, las candidaturas, la interpretación de la ley de cuota y apelaciones a los organismos de administración electoral. Por último, los organismos gubernamentales impugnan las listas de candidatos, la constitucionalidad de la norma, su interpretación, su incumplimiento y la interpretación de la paridad de género (véase la Gráfica 4).

Gráfica 4. Asuntos que impugnan mujeres, hombres, partidos y OG relacionados a la ley de cuota de género en elecciones legislativas en nueve países de América Latina, 1993-2018



Elaboración propia con información de la Tabla 2 del Anexo

La presencia de más sentencias en la integración de listas de candidaturas es porque se analizan las elecciones legislativas. En estos comicios, las mujeres demandan que los partidos incumplan con la cuota de género, por lo que las ciudadanas buscan su correcta aplicación y encuentran en los tribunales una vía para defender sus derechos. Partidos y varones también hallan en las cortes una alternativa para refrendar sus intereses, aunque éstos, en su mayoría, van en contra de la acción afirmativa.

Respecto al modelo de tribunal electoral y el asunto que se impugna, las impugnaciones referentes a la integración de la lista de candidaturas se concentran en el Tribunal ordinario del Poder Judicial y el Órgano de administración electoral con labor jurisdiccional, mientras que la constitucionalidad de las leyes de cuota se analiza en el Tribunal ordinario del Poder Judicial, el Tribunal administrativo y el Tribunal o Consejo constitucional. Por último, el Tribunal especializado sin atribución administrativa concentra los asuntos correspondientes a cuestionamientos de decisiones del tribunal, apelación al órgano de administración, leyes contrarias a la cuota de género y los estatutos partidistas (véase la Tabla 3).

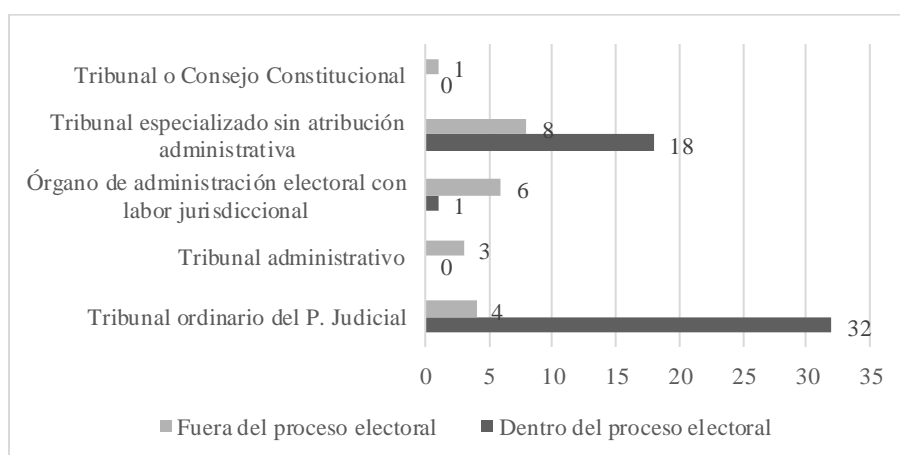
*Tabla 3. Resolución de las demandas iniciadas por los actores con base en el modelo de tribunal respecto a la cuota de género en elecciones legislativas en nueve países de América Latina, 1993-2018*

Qué se impugna	Tribunal ordinario del P. Judicial		Tribunal administrativo		Órgano de administración electoral con labor jurisdiccional		Tribunal especializado sin atribución administrativa		Tribunal o Consejo constitucional	
	A favor	En contra	A favor	En contra	A favor	En contra	A favor	En contra	A favor	En contra
Integración de lista de candidaturas	21	2	1		10	4				
Constitucionalidad de la ley de cuota	2	2	1	1	1				1	
Aplicación de la paridad	2				1		1			
Interpretación de la ley de cuota de género	4				2		2			
Decisión del tribunal electoral	1	2					1	2		
Apelación a decisión de órgano electoral					1		2			
Ley contraria a la cuota de género							1	1		
Estatutos partidistas							2			
El cumplimiento de la cuota de género					1					
Interpretación del principio de paridad horizontal					1					

*Elaboración propia con información de la Tabla 2 del Anexo*

En cuanto al momento en el que se resuelven las impugnaciones, la mayoría ocurre durante el proceso electoral con un 69.86% de las ocasiones (véase la Gráfica 5), debido a la cantidad de asuntos sobre impugnaciones en los temas de integración de candidaturas, así como a cuestionamientos a las autoridades de administración electoral y las cortes. Sentencias que se encuentran en los modelos de Tribunal ordinario del Poder Judicial y el Tribunal especializado sin atribución administrativa. Y, fuera del proceso electoral, con un 30.14% (véase la Gráfica 5) debido a las sentencias emitidas por los temas de constitucionalidad de las leyes de cuota de género e interpretación de la aplicación de la normativa.

*Gráfica 5. Momento en que se llevan a cabo las impugnaciones sobre la ley de cuota de género en elecciones legislativas en nueve países de América Latina, 1993-2018*



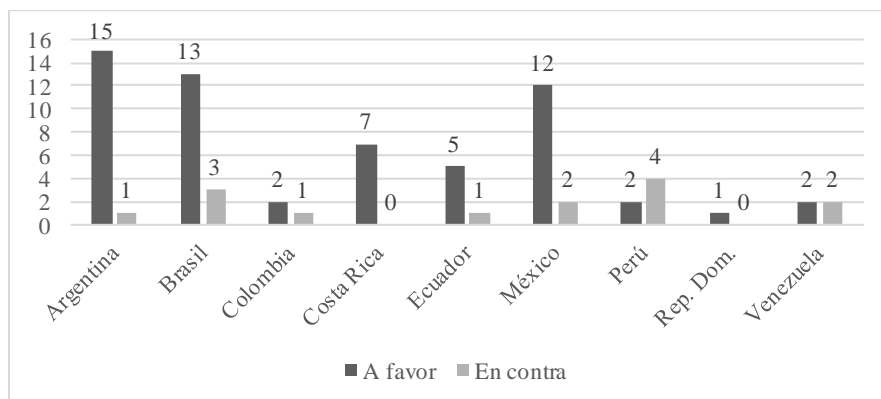
*Elaboración propia*

En algunos países las cortes llegan a emitir sentencias después del proceso electoral. En Costa Rica, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Elecciones, cuyo modelo es un Órgano de administración electoral con labor jurisdiccional, estudia los procesos electorales con el objeto de encontrar los vacíos legales en las leyes y emitir una interpretación que beneficie la aplicación de la normatividad en los próximos comicios. Por tal motivo, la mayoría de sus sentencias analizadas se encuentran entre elecciones.

Otro caso es Colombia, con la característica de que la Sección Quinta del Consejo de Estado, como Tribunal administrativo, puede emitir sentencias una vez terminado el proceso electoral con implicaciones como la pérdida de un asiento en el Legislativo en caso de que se determine la nulidad de la elección. Como sucedió en abril de 2019 cuando la congresista Ángela María Robledo tuvo que dejar su escaño después de desempeñarse nueve meses como legisladora en la Cámara de Representantes<sup>3</sup>.

Con base en el banco de datos construido para la investigación, los países con mayor número de sentencias relativas al acceso de mujeres al Congreso son Argentina y Brasil con el 21.92% y México con el 19.18%, seguidos de Costa Rica con el 10.94%. En cambio, los que tienen menos impugnaciones son Colombia con el 4.11% y República Dominicana con el 1.56%. En cuanto al sentido en el que se falla por país destaca que, de las sentencias recolectadas, en el caso de Costa Rica todas sus resoluciones favorecen el acceso de las mujeres al Congreso, mientras que Perú es el país que más fallos adversos tiene (véase la Gráfica 6).

*Gráfica 6. Número de sentencias de cuota de género en elecciones legislativas en nueve países de América Latina, 1993-2018*



*Elaboración propia*

<sup>3</sup> La sentencia que generó la destitución de la congresista Ángela María Robledo Gómez, emitida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, es la número 1 1001-03-28-000-2018-00074-00 (Acumulado) emitida el 25 de abril de 2019.

El caso de Argentina, como uno de los países con más sentencias, se explica porque el país cuenta con comicios legislativos cada dos años —al renovarse parcialmente la Cámara de Diputados—, por contar con la primera cuota de género en la región y por presentar impugnaciones acerca de su aplicación desde la primera elección legislativa en la que se empleó en 1993.

En cambio, los casos de Brasil, México y Costa Rica cuentan con más sentencias porque, retomando la Gráfica 1 del Capítulo 1, son los países que tienen mayor judicialización, la cual se refleja en el alto número de sentencias emitidas por sus cortes en los últimos diez años. Costa Rica destaca por tener un gran número de resoluciones, pues es un país con un territorio y una población pequeños en comparación con los otros dos.

Por otra parte, en cuanto a los casos con menos sentencias, el caso colombiano puede explicarse porque la ley de cuota de género no cuenta con fortaleza y la ciudadanía no acude a la corte para demandar su aplicación. En el caso de República Dominicana el tribunal electoral cuenta con un mayor número de impugnaciones a nivel local.

Por último, Costa Rica cuenta solamente con sentencias positivas debido a la postura progresista que ha sostenido el tribunal desde la aparición de las cuotas de género; en cambio, en Perú la corte mostró resistencia en los primeros años de la aplicación de la acción afirmativa y llegó al punto de recibir sugerencias por parte de la CIDH para que modificara su postura en las siguientes decisiones (MMVP, 2012: 89).

Continuando con la descripción por país, encontramos que Argentina tiene el mayor número de impugnaciones que iniciaron mujeres y partidos políticos que se resolvieron a favor de la ley de la cuota de género, mientras que México cuenta con más reclamos iniciados por hombres que se resolvieron a favor de la cuota y Perú registra sentencias que comenzó un organismo gubernamental y que resultaron en fallos en contra del acceso de las mujeres al Congreso (véase la Tabla 4).

*Tabla 4. Sentencias relativas a la cuota de género en elecciones legislativas por actor que impugna en elecciones legislativas en nueve países de América Latina, 1993-2018*

Quién impugna	Argentina		Brasil		Colombia		Costa Rica		Ecuador		México		Perú		República Dominicana		Venezuela	
	A favor	En contra	A favor	En contra	A favor	En contra	A favor	En contra	A favor	En contra	A favor	En contra	A favor	En contra	A favor	En contra	A favor	En contra
Mujer	6		1	1					2		3	1	1	1				
Hombre	3		1	1		1					5				1			
Hombre y mujer							1					1						
Partido político	6	1	5	1	1		3				4							
ONGs									1									
OG			6		1		2						1	3				
ONG y OG									1									
n/a							1		2								2	2

*Elaboración propia*

En cuanto a los actores que impugnaron por país, los casos de Argentina y México se explican por el proceso de selección de candidaturas: es el caso argentino ejemplo de la reivindicación de las mujeres por una adecuada aplicación de la cuota y el mexicano de resistencia por parte de hombres para imponer sus intereses. En cambio, en Perú es interesante que quien más demande sea la Defensoría del Pueblo (institución encargada de la defensa de los derechos humanos del pueblo peruano), debido a que la ley permite que este organismo gubernamental pueda llevar a cabo demandas ante posibles violaciones a los derechos de la ciudadanía, como lo es el derecho a ser votada que tienen las ciudadanas con la acción afirmativa.

Por último, respecto a los asuntos por país, encontramos que la integración de la lista de candidaturas y la constitucionalidad de la ley de cuota son los asuntos que tienen mayor



presencia en la mayoría de los países analizados debido a las elecciones estudiadas. Es Argentina en donde más casos hay de cuestionamiento a las listas de candidatos, mientras que en Colombia y Venezuela es donde los partidos han demandado más la constitucionalidad de la cuota de género (véase la Tabla 5).

*Tabla 5. Asuntos que se impugnan por país relacionado a la ley de cuota de género en elecciones legislativas en nueve países de América Latina, 1993-2018*

Asuntos	Argentina	Brasil	Colombia	Costa Rica	Ecuador	México	Perú	Rep. Dom.	Venezuela
Integración de lista de candidaturas	15	8	1		4	7	3		
Constitucionalidad de la ley de cuota	1	1	2	1				1	2
Aplicación de la paridad				1		1			2
Interpretación de la ley de cuota de género		4		2		1	1		
Decisión del tribunal electoral		1				1	2		
Apelación a decisión de órgano electoral				1		2			
Ley contraria a la cuota de género					2				
Estatutos partidistas						2			
El cumplimiento de la cuota de género				1					
Interpretación del principio de paridad horizontal				1					

*Elaboración propia*

Los asuntos con mayor presencia en los nueve países estudiados son la integración de las listas de candidaturas y la constitucionalidad de la ley de cuota de género. La primera tiene su explicación en el proceso de selección de los aspirantes a candidatos durante el proceso electoral. En cambio, la segunda puede interpretarse como la resistencia de partidos y hombres a una acción afirmativa que impulsan en el Legislativo, pero que intentan frenar en instancias judiciales, buscando bloquear o dificultar el acceso de las mujeres a la política.

#### A MANERA DE REFLEXIÓN: LOS RESULTADOS ESTADÍSTICOS

En esta ponencia se muestra una aproximación al comportamiento de las cortes ante las demandas relativas a la aplicación de las cuotas de género en América Latina. Se destaca la importancia del modelo institucional de las cortes, los actores y las posibles intenciones por las que recurren a instancias judiciales, los asuntos que más se discuten y si las sentencias se presentan durante el proceso electoral o fuera de éste.

En cuanto al modelo institucional de los tribunales electorales (Tribunal ordinario del Poder Judicial, Tribunal administrativo, Órgano de administración electoral con labor jurisdiccional, Tribunal especializado sin atribución administrativa, Tribunal o Consejo constitucional), hay dos aspectos institucionales relevantes que se evidencian con la información estadística. El primero es la fortaleza de las cortes por medio del control de constitucionalidad y el segundo es ser la máxima autoridad en la materia electoral. Con estas facultades –en la mayoría de los casos– las sentencias son acatadas y generan precedentes que han favorecido el acceso de las ciudadanas al Legislativo.

Respecto a la fortaleza de las cortes, de los nueve países estudiados, Venezuela es excepción debido a que el Consejo Nacional Electoral no es la máxima autoridad en la materia y carece de facultades para imponer sanciones a quien incumple sus decisiones. Esto a pesar de que el CNE fue el primer tribunal en América Latina en solicitar la aplicación de la paridad de género al exigir a las agrupaciones políticas, por medio de dos sentencias, en 2005 y 2008, la integración de las candidaturas en proporciones de 50% para

mujeres y 50% para hombres<sup>4</sup>. El resultado no fue favorable para el CNE al no contar con la fuerza para sancionar a las élites partidistas y lograr, de esta forma, la aplicación de la cuota de género (Freidenberg 2019: 16).

En cuanto al segundo aspecto institucional, la facultad de atraer, analizar y emitir sentencias en cualquier momento, se observó que el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica tiene esta atribución de oficio mientras que la Sala Quinta del Consejo de Estado de Colombia la tiene, pero sólo mediante denuncia. Por tal motivo, a diferencia de los demás tribunales estudiados que solamente generan sentencias durante el proceso electoral, el TSE y el CE son los tribunales que pueden emitir resoluciones en el periodo entre elección y elección, lo cual les otorga mayor tiempo para estudiar asuntos específicos. En el caso de Costa Rica, la atribución mencionada explica, junto con su posicionamiento progresista respecto a las cuotas de género, que sea el único caso observado que ha emitido decisiones judiciales en favor del acceso de las mujeres al Legislativo a partir del estudio de la norma en la elección previa a la que fue aplicada.

Por lo que concierne a los actores que recurren a los tribunales electorales, los datos analizados indican que candidatas mujeres son quienes más recurren a la vía judicial. Lo hacen en mayor proporción que candidatos hombres, partidos políticos, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. La principal explicación es que son las figuras que se encuentran involucradas directamente en la selección de las candidaturas, proceso en el que intentan defender sus derechos e intereses, para lo cual hallan en las instancias judiciales una alternativa.

Mujeres y hombres tienen el mismo objetivo, formar parte de las listas de candidatos, pero las circunstancias a las que se enfrentan son diferentes porque la mayoría de los métodos de selección privilegian candidaturas masculinas. Ante este escenario, las cuotas de género intentan disminuir las brechas y generar condiciones más igualitarias entre hombres y mujeres.

---

<sup>4</sup> Resalta que, durante los años en los que se efectuaron las sentencias a favor de los derechos políticos de las mujeres, Venezuela contaba con un desarrollo democrático adecuado en comparación con el actual, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Democrático de América Latina. Información disponible en: <[http://www.idd-lat.org/2016/informes\\_x\\_pais/304/2016-venezuela.html](http://www.idd-lat.org/2016/informes_x_pais/304/2016-venezuela.html)>. (Consultado el 26 de septiembre de 2019).

En materia jurisdiccional, de acuerdo con los datos obtenidos, la mayoría de las demandas iniciadas por ciudadanas buscan la correcta aplicación de las cuotas de género y con ello mayor igualdad en la competencia por acceder a los puestos de representación pública. En cambio, varones y dirigentes de partidos políticos (que en su mayoría son del sexo masculino) utilizan en sus impugnaciones argumentos que son contrarios a las cuotas de género; intentan de esta manera continuar con una carrera desigual, en la que mantienen ventajas respecto a las mujeres.

De esta forma se evidencia el supuesto en la literatura que señala a hombres y organizaciones políticas como los principales actores que se resisten a la participación de las mujeres en la política al buscar incumplir las cuotas de género, pues saben que de este modo se beneficia la candidatura de un hombre.

En relación con los temas que más se presentan en las sentencias analizadas, no sorprende que la mayoría se concentre en la integración de las listas de candidaturas, debido a que es donde más directamente impacta en la aplicación de las cuotas de género y por ser el momento en el que los diferentes actores buscan defender sus derechos para convertirse en aspirantes a un cargo. Sin embargo, un segundo tema es el cuestionamiento, presentado en mayor proporción por hombres y partidos políticos, de la constitucionalidad de la ley de cuota de género. Ésta es una de las formas más comunes en la que se oponen a los derechos políticos de las mujeres a pesar de la aprobación en el Legislativo de estas acciones afirmativas.

La mayoría de las sentencias estudiadas fueron a favor de las cuotas de género. Pese a que también hubo resoluciones en sentido contrario, éstas se presentaron con menor frecuencia. Destaca que la mayoría de los tribunales tuvieron tanto decisiones favorables como adversas a las cuotas, con excepción de Costa Rica y República Dominicana, donde las sentencias siempre fueron a favor.

Con el propósito de explicar por qué los tribunales electorales han cambiado de criterio al aplicar las leyes de cuota de género en los países estudiados, la literatura sobre el comportamiento de los jueces cuenta con más de nueve enfoques teóricos (Posner 2011 ;

Epstein, Landes y Posner 2013)<sup>5</sup>. En esta investigación se retoma la teoría actitudinal, la teoría politológica y la teoría del mercado laboral.

La teoría actitudinal señala que las sentencias son reflejo de las preferencias de los jueces, una especie de balance entre lo que consideran que debería suceder y lo que es viable. En este enfoque la ideología de los juzgadores tiene un peso significativo para explicar la forma en que emiten sus sentencias. En este sentido, la conformación de la corte influirá en la forma en que se analizan y resuelven distintos temas (Posner, 2011: 42; Marín Hernández, 2018: 9).

Al respecto, considerando que la mayoría de las cortes electorales en América Latina cuenta con jueces designados por un periodo determinado de tiempo, junto con otros elementos más, como el contexto en el que se toma la decisión, pueden explicarse los cambios de criterio en la aplicación de las cuotas de género.

La teoría politológica del comportamiento judicial, basada en el institucionalismo de elección racional, sostiene que los jueces son actores políticos con objetivos múltiples y complejos que pueden ser complementarios o contradictorios en ocasiones (Marín Hernández, 2018: 9 y 10). Por lo tanto, cuando votan lo hacen de manera estratégica, considerando las preferencias y posibles acciones de otros actores, como colegas, legisladores, el presidente o la opinión pública. Sobre todo, porque a los jueces no les gusta disentir y buscan no ser objeto de crítica (Posner, 2011: 44; Marín Hernández, 2018: 10).

Los tribunales electorales, al igual que otras cortes, al emitir una sentencia, consideran la postura de otros actores sobre el tema. Por tal motivo el juez electoral analiza el impacto que tendrán sus decisiones en los distintos actores políticos (Brenes Villalobos, 2012: 304). En algunos casos, cuando una sentencia puede tener un impacto fuerte en éstos, las cortes tienden a evitar una confrontación. Ramos y Da Silva indican que tal es el caso en la arena electoral brasileña, lo cual explica por qué el TSE no ha emitido sentencias importantes que favorezcan el acceso de las brasileñas al Legislativo (2019: 27).

---

<sup>5</sup> Teoría actitudinal del comportamiento judicial, teorías politológicas del comportamiento judicial, teoría estratégica del comportamiento judicial, teoría sociológica del comportamiento judicial, teoría psicológica del comportamiento judicial, teoría económica del comportamiento judicial, teoría organizacional, teoría pragmática del comportamiento judicial, teoría fenomenológica del comportamiento judicial, teoría legalista del comportamiento judicial, teoría del mercado laboral del comportamiento judicial (Posner, 2011; Epstein, Landes y Posner, 2013).

Por último, la teoría del mercado laboral explica el comportamiento de los jueces al analizarlos como trabajadores gubernamentales. En este sentido, el juez se convierte en un agente y el gobierno es el principal en términos económicos. Un trabajador cuidará de sus ingresos, pero también de otros elementos que representen un incentivo, como la posibilidad de una promoción que le permita acceder a un trabajo más satisfactorio y reconocido al interior o fuera del sistema judicial (Epstein, Landes y Posner, 2013: 25-31; Posner, 2011: 73).

Lo relevante de la teoría del mercado laboral, en cuanto a las cortes electorales en América Latina, es que, al contar con un periodo determinado en el cargo, pueden buscar un ascenso al interior de la rama judicial o intentar ingresar a otra institución. Por lo tanto, su comportamiento puede explicarse con base en estos objetivos personales.

Por otra parte, como consecuencia del análisis cuantitativo del capítulo, se clasificaron los nueve países estudiados en dos categorías, de acuerdo con la participación de las cortes a favor o en contra del acceso de mujeres a los congresos: I. Casos favorables, es decir, que favorecieron el acceso de las mujeres (Argentina, Costa Rica, México y República Dominicana), y II. Casos adversos o que impidieron la correcta aplicación de la cuota (Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela).

#### I. Casos favorables

Los casos favorables son Argentina, Costa Rica, México y República Dominicana, ya que, en los cuatro países, los tribunales electorales han participado en el reforzamiento de las leyes de cuota de género desde su aparición en cada uno de estos países y, como consecuencia, se ha presentado un continuo crecimiento del número de mujeres que acceden al Congreso Nacional. Además, Costa Rica y México cuentan con una alta judicialización, con base en el alto número de casos que han resuelto en la última década.

Destaca que los cuatro casos favorables son países que cuentan con tribunales electorales fuertes, en términos de diseño institucional, que tienen la última palabra en la resolución de conflictos en materia electoral y cuentan con la facultad del control de constitucionalidad. Incluso Argentina, donde a pesar de que la Cámara Nacional Electoral no cuenta con esta

última facultad, ha construido jurisprudencias importantes en diversos temas, incluyendo los criterios respecto a la ley de cuota de género.

En el caso de Argentina, las sentencias analizadas se enfocan principalmente en la integración de las listas de candidaturas durante los procesos electorales. Cada dos años se renueva parcialmente la Cámara de Diputados y las mujeres utilizan los recursos ante la CNE para acceder a los cargos públicos.

Uno de los elementos que destaca del caso argentino es que, a pesar de lograr el acceso de un número igual o incluso mayor de mujeres con respecto al porcentaje estipulado en la ley de cuota y de ser el primer país de América Latina en aplicar esta acción afirmativa, tardó más de dos décadas en reforzar legislativamente la norma. Hasta 2017 se estipuló un 30% de cuota, lo cual cambió con la reforma a la ley al pasar a una cuota de 50% en las elecciones de 2019.

El caso de México muestra una relación entre el fortalecimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y un mayor número de sentencias relativas al acceso de las mujeres al Legislativo. Sin embargo, esta relación no siempre fue incremental. A partir de la reforma de 1996 se amplió el acceso de la ciudadanía a litigios por medio del juicio de protección de los derechos políticos y en 2007 el tribunal obtuvo la facultad del control de constitucionalidad, así como ser la última instancia en materia electoral<sup>6</sup>. Desde entonces, y con un ambiente político más favorable a la representación de las mujeres, comenzaron a incrementar no solamente el número de decisiones emitidas por el tribunal sino también la trascendencia de éstas en cuanto a la defensa de los derechos políticos de los ciudadanos, en especial de las mujeres.

Una característica del caso mexicano son los cambios de criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a la aplicación de la ley de cuota de género. Esto se puede relacionar con las modificaciones que ha sufrido la normatividad, los debates alrededor de su interpretación y la integración de la corte. Por ejemplo, en el primer caso, una excepción en la ley permitía que no fuera obligatoria la aplicación de la cuota de género, lo cual fue modificado en 2014. En cuanto al segundo, las primeras interpretaciones

---

<sup>6</sup> El TEPJF obtuvo la facultad de ser la máxima autoridad en materia electoral a partir de 1996. En cuanto al control de constitucionalidad, el tribunal fue investido con esta facultad con la reforma de 2007.

de la ley de paridad en 2014 y 2015, en las que se otorgó autonomía a los partidos para integrar sus listas de candidatos, las realizó un grupo colegiado diferente al actual, el cual ha aplicado con una postura más progresista el principio de paridad en las candidaturas y en la integración de los órganos de representación popular durante 2017 y 2018.

En cuanto a las singularidades, el caso de República Dominicana cuenta con una historia breve en comparación con los demás países respecto a las leyes de cuota de género. La decisión más relevante sobre los derechos políticos de las mujeres ha sido la declaración, en 2013, de la constitucionalidad de la ley electoral que establece la cuota de género. El Tribunal Superior Electoral fue constituido en 2011, por lo que sólo ha participado en dos elecciones y, hasta el momento, se ha pronunciado en igual número de ocasiones a favor de la ley de cuota en elecciones locales<sup>7</sup>.

Costa Rica cuenta con sentencias favorables por parte del TSE con respecto al acceso de las mujeres al Legislativo desde 1998. Lo anterior se puede explicar debido a la facultad de la corte de analizar de oficio las leyes aplicadas. Además, el tribunal centroamericano es el único en América Latina que ha participado directamente en la construcción de una reforma con el propósito de fortalecer la cuota de género. En 2009, las y los diputados solicitaron una consulta al Tribunal Supremo de Elecciones en cuanto a la aplicación de la paridad, en vísperas de una modificación a la legislación electoral que terminó por aumentar el porcentaje mínimo de mujeres candidatas de 40% a 50%.

## II. Casos adversos

Los casos adversos son Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, los cuales se caracterizan porque los tribunales no han fallado por la ampliación de los derechos políticos de las mujeres o sus decisiones no han tenido un impacto trascendente en el fortalecimiento de la ley de cuota de género.

El caso de Brasil es interesante porque el Tribunal Superior Electoral es uno de los más fuertes en toda la región y su nivel de judicialización es alto, de acuerdo con el número de

---

<sup>7</sup> El Tribunal Superior Electoral de República Dominicana sólo ha resuelto ocho sentencias respecto a la cuota de género en elecciones locales: tres en 2014 y cinco en 2016. Las dos sentencias positivas se presentaron en los comicios de 2016.



sentencias emitidas durante las últimas dos décadas. Sin embargo, la lucha por los derechos políticos de las mujeres no ha encontrado un aliado importante en la rama judicial, por lo menos no en asuntos trascendentales en materia electoral.

El Tribunal Superior Electoral de Brasil cuenta con varias sentencias a favor de la ley de cuota de género, como determinar el porcentaje de ésta o un porcentaje mínimo de tiempos en radio y televisión para mujeres<sup>8</sup>. Sin embargo, existe una ausencia de fallos en asuntos de gran calado, como con las *fake candidates* o candidaturas falsas, en las cuales renunciaban candidatas cuyos suplentes eran hombres y el tribunal consideró que no era meritorio de sanción o corrección alguna (Ramos y Da Silva, 2019: 16-25)<sup>9</sup>.

Colombia es uno de los dos casos en América Latina en los que un tribunal determinó inconstitucional la ley de cuota de género en el año 2000. El argumento de la Corte constitucional fue que dicha propuesta violentaba la vida interna de los partidos políticos. La misma corte, once años después, tras algunas modificaciones en las leyes que involucraban a los partidos, declaró constitucional la ley de cuota señalando que beneficiaba la igualdad real y efectiva en cuanto a la participación política. El cambio de criterio del tribunal muestra la relevancia que adquirieron los derechos políticos de las mujeres a nivel nacional e internacional.

La ley de cuota de género se retrasó una década, de 2000 a 2011, lo que explica el poco crecimiento del número de mujeres en la vida política de Colombia y el número de legisladoras con los que ha contado en su congreso. Sin embargo, en los últimos siete años el Consejo de Estado ha tenido una mayor participación en el tema, sobre todo en elecciones locales.

Ecuador es un caso adverso y atípico debido a una confrontación entre el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal constitucional en cuanto a la inaplicación de la cuota de género, la cual se refleja en sus posturas sobre el tema. Entre los años 2000 y 2004 se llevaron a cabo

---

<sup>8</sup> Véanse las sentencias del TSE nro. 21.608/2004, nro. 0600252-18 y nro. 214-98.2012.6.21.009.

<sup>9</sup> En 2009, México tuvo un caso similar al de las candidaturas falsas en Brasil: diversas mujeres que ganaron e ingresaron a la Cámara de Diputados renunciaron y, en todos los casos, quienes las sustituyeron fueron varones. En respuesta a dicho suceso, el TEPJF generó la sentencia llamada coloquialmente como “antijuanitas”, que estipula que candidatos propietarios y suplentes deben ser del mismo género; de esta manera se evitaría que los partidos transgredan la ley de cuota de género y obstaculicen el acceso de las mujeres al Legislativo.

impugnaciones a nivel nacional y subnacional, en su mayoría por organismos no gubernamentales a favor de los derechos de la mujer. En específico, se cuestionaba un artículo de la norma que afectaba el cumplimiento de la cuota de género. Las demandas llegaban en primera instancia al Tribunal Supremo Electoral, quien desechaba las demandas, y en segunda instancia, al Tribunal constitucional, quien otorgó la razón al grupo demandante y resolvió un resarcimiento por parte de la instancia electoral que no acataba la sentencia.

Más allá de la defensa de los derechos políticos de las mujeres, Ecuador es una lección respecto a la importancia de delimitar adecuadamente las facultades de las distintas cortes en el entramado institucional, para evitar confrontaciones entre las mismas. Lección que, en el caso ecuatoriano, se resolvió con la construcción del Tribunal Contencioso Electoral en 2008, que desde los primeros años delimitó sus competencias con respecto a la Corte constitucional en la resolución de una impugnación relativa, también, a la ley de cuota de género.

El caso de Perú fortalece el argumento de Smulovitz (2008) acerca de la aparición de judicialización en lugares donde la confianza y el prestigio de las instituciones judiciales es bajo y su eficacia e independencia cuestionable (Smulovitz 2008: 290). En las elecciones legislativas de 2001 se presentaron diversas impugnaciones por parte de la Defensoría del Pueblo, quien demandó el cumplimiento de la cuota de género y posteriormente objetó los fallos del Jurado Nacional de Elecciones que no favorecieron los derechos de las ciudadanas. Las dos últimas elecciones estudiadas muestran un cambio de criterio por parte del Jurado Nacional de Elecciones, en las cuales se ha fallado a favor de la aplicación de la cuota de género, pero el número de legisladoras en el país andino aún se encuentra por debajo del 30%.

Venezuela, el último caso adverso de los países analizados, adoptó en 1997 una ley de cuota de género del 30%, que se aplicó solamente en las elecciones de 1998, debido a que fue declarada inconstitucional en el año 2000. La corte determinó que la acción afirmativa violentaba la Constitución de 1999, en específico, la noción de igualdad de todas las personas ante la ley al otorgar una supuesta ventaja a las mujeres frente a los hombres para acceder a cargos de representación popular (Archenti y Tula, 2014: 53).

De esta forma, Venezuela es el segundo de los casos en donde una corte ha declarado inconstitucional la ley de cuota de género, y, a pesar de los intentos por parte del Consejo Nacional Electoral por impulsar la paridad mediante sus sentencias, los derechos políticos de las ciudadanas no han sido favorecidos a causa de la debilidad institucional del mismo CNE, que poco puede ofrecer a la ciudadanía en cuanto a la defensa de sus derechos. Por último, en 2015 fue aprobada una ley de paridad en el país sudamericano, pero hasta la fecha no se ha reglamentado y no ha auxiliado de ningún modo la representación descriptiva de las mujeres en el Congreso.

En resumen, los hallazgos estadísticos del capítulo se vinculan con los cuatro elementos del concepto de judicialización utilizado para la investigación: I. incremento del impacto de las decisiones de las cortes; II. aumento en la resolución de conflictos; III. mayor confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado; y IV. los actores políticos recurren a la vía legal para resolver conflictos y defender sus intereses (Domingo, 2004: 10).

En cuanto al impacto de las decisiones de las cortes, la evidencia apunta a que no en todos los casos éstas juegan un papel a favor del incremento de la representación política de las mujeres en los legislativos de América Latina. El análisis estadístico sugiere que los factores que condicionan la función de los tribunales electorales son la fortaleza institucional (control de constitucionalidad, ser la máxima instancia y atracción de oficio de un tema) y la judicialización (el constante número de demandas para la correcta aplicación de las cuotas de género).

Por último, con respecto a la confianza en las instituciones y la recurrencia de los actores a la vía legal como una opción para resolver conflictos, la evidencia sugiere que, en algunos países, para diversos actores los tribunales son una elección viable en la defensa de sus intereses. A pesar de que instrumentos como Latinobarómetro<sup>10</sup> indiquen que los sistemas judiciales en América Latina no han contado con la confianza por parte de los ciudadanos en las últimas dos décadas.

---

<sup>10</sup> Para más información véase: <<http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp>>.

## BIBLIOGRAFÍA

- Archenti, Néida y Tula, María Inés (2014), “Cambios normativos y equidad de género. De las cuotas a la paridad en América Latina: Los casos de Bolivia y Colombia”. En *América Latina Hoy*. Vol. 66. Pp. 47-68.
- Báez Carlos, Gilas Karolina y González Oropeza Manuel (2016), *Hacia una democracia paritaria. La evolución de la participación política de las mujeres en México y sus entidades federativas*. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. México.
- Brenes Villalobos, Luis Diego (2012), “Judicial Politics y tribunales electorales”. En *Justicia Electoral. Revista del TEPJF*. Vol. 1. Número 10. Pp. 293-316.
- Freidenberg Flavia y Gilas Karolina (2019), “En nombre de los derechos y a golpe de sentencias: el impacto de la justicia electoral sobre la representación política de las mujeres mexicanas”. Texto preparado para su discusión en el Seminario Permanente de “Reformas electorales y democracia”, organizado por el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, el 19 de agosto de 2019.
- IDEA (2011), *Justicia electoral: Una introducción al manual de IDEA Internacional*. IDEA Internacional. Suecia.
- Lehoucq, Fabrice E. (2002), “Can parties police themselves? Electoral governance and democratization” En *International Political Science Review*. Vol. 23, número 1. Pp. 29-46.
- Medina Torres, Luis Eduardo (2005), *Las consecuencias políticas de la justicia electoral mexicana. El tribunal electoral y la anulación de comicios, 1996-2003*. Tesis para obtener el Grado de Doctor en Estudios Sociales, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. México.
- Orozco Henríquez, J. Jesús (2007), “El contencioso electoral, la calificación electoral”. En Nohlen Dieter, Zovatto Daniel, Orozco Jesús, Thompson José (compiladores) (2007), *Tratado de derecho electoral comparado de América Latina*. IIDH,

Universidad de Heidelberg, International IDEA, TE, IFE y FCE. México. Pp. 1152 - 1988.

Orozco Henríquez, Jesús (lead author) (2010), *Electoral Justice: The international IDEA Handbook*. IDEA. Sweden.

Orozco Henríquez, José de Jesús (2019), Justicia electoral comparada d América Latina. UNAM-IIIJ. México.

Ramos, Luciana y Da Silva, Virgílio (2019), “The gender gap in Brazilian politics and the role of the electoral court”. En *Politics & Gender*. Pp. 1-29.

Sobrado González, Luis Antonio (2006), “Tendencias de la justicia electoral latinoamericana y sus desafíos democráticos”. En *Revista de Ciencias Jurídicas*. Número 109. Pp. 155-184.

Staffan, Darnolf (2011), “Assessing Electoral Fraud in New Democracies: A New Strategic Approach”. IFES White Paper. USA.